

No. 38953

**Spain
and
Bolivia**

**Agreement on the promotion and reciprocal protection of investments between the
Kingdom of Spain and the Republic of Bolivia. Madrid, 29 October 2001**

Entry into force: *9 July 2002 by notification, in accordance with article 13*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Spain, 1 November 2002*

**Espagne
et
Bolivie**

**Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Bolivie relatif à la promotion
et à la protection réciproques des investissements. Madrid, 29 octobre 2001**

Entrée en vigueur : *9 juillet 2002 par notification, conformément à l'article 13*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Espagne, 1er novembre
2002*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**ACUERDO
PARA LA PROMOCION Y LA PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA**

El Reino de España y la República de Bolivia, en adelante "las Partes Contratantes",

Deseando intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos países,

Proponiéndose crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante,

y

Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula las iniciativas en este campo,

Han convenido lo siguiente:

**ARTICULO 1
DEFINICIONES**

A los efectos del presente Acuerdo,

1. Por "inversor" se entenderá cualquier nacional o cualquier sociedad de una de las Partes Contratantes que realice inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante:

- a) por "nacional" se entenderá toda persona física que tenga la nacionalidad de una de las Partes Contratantes de conformidad con su legislación.
- b) por "sociedad" se entenderá toda persona jurídica o cualquier otra entidad legal constituida o debidamente organizada de conformidad con las leyes de esa Parte Contratante y que tenga su domicilio social en el territorio de esa misma Parte Contratante, tales como sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas o asociaciones de empresas, entre otras.

2. Por "inversiones" se designa todo tipo de activos que hayan sido invertidos por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con la legislación de esta última, incluyendo en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:

- a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares;

- b) acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en sociedades;
- c) derechos a aportaciones monetarias y a cualquier otra prestación contractual que tenga valor económico y esté vinculada a una inversión;
- d) derechos de propiedad intelectual: derechos de propiedad industrial tales como signos distintivos, patentes, diseños y dibujos industriales; derechos de autor y derechos conexos; circuitos integrados y obtentores de variedades vegetales;
- e) derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por ley o en virtud de un contrato, incluidas las concesiones para la exploración, prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

Las inversiones realizadas en el territorio de una Parte Contratante por una sociedad de esa misma Parte Contratante, pero que sea de propiedad o esté efectivamente controlada por inversores de la otra Parte Contratante, se considerarán igualmente inversiones realizadas por estos últimos inversores siempre que se hayan efectuado conforme a las disposiciones legales de la primera Parte Contratante.

Ninguna modificación en la forma en que estén invertidos o reinvertidos los activos afectará su carácter de inversión siempre que dicho cambio se realice de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante receptora de la inversión.

3. Por "rentas de inversión" se entenderán los importes producidos por una inversión y, en particular, aunque no exclusivamente, beneficios, dividendos, intereses, plusvalías, cánones, honorarios y cualquier renta proveniente de excedentes de explotación.

4. El término "territorio" designa:

- a) con respecto al Reino de España: El territorio terrestre, las aguas interiores y el mar territorial así como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extienden fuera del límite del mar territorial sobre las cuales tiene o puede tener jurisdicción y/o derechos soberanos de acuerdo con el Derecho Internacional.
- b) con respecto a la República de Bolivia: El territorio bajo su soberanía y jurisdicción de conformidad con su legislación y con el Derecho Internacional.

ARTICULO 2 PROMOCION Y ADMISION DE LAS INVERSIONES

1. Cada Parte Contratante promoverá en su territorio, en la medida de lo posible, las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.

2. Cuando una Parte Contratante haya admitido una inversión en su territorio concederá, de conformidad con sus disposiciones legales, los permisos necesarios en relación con dicha inversión y con la realización de contratos de licencia, de asistencia técnica, comercial o administrativa. Cada Parte Contratante se esforzará en conceder, cada vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas en relación con las actividades de consultores o de personal cualificado, cualquiera que sea su nacionalidad.

ARTICULO 3 PROTECCION

1. Las inversiones realizadas por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante recibirán un tratamiento justo y equitativo y disfrutarán de plena protección y seguridad. Ninguna de las Partes Contratantes deberá, en ningún caso, otorgar a tales inversiones un tratamiento menos favorable que el requerido por el Derecho Internacional.

2. Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizará en modo alguno, mediante medidas arbitrarias o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute, la disposición, la venta o, en su caso, la liquidación de tales inversiones. Cada Parte Contratante deberá cumplir cualquier obligación contractual contraída por escrito en relación con las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y que sea conforme con la legislación interna de la primera Parte Contratante.

ARTICULO 4 TRATO NACIONAL Y CLAUSULA DE NACION MAS FAVORECIDA

1. Cada Parte Contratante otorgará en su territorio a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento que no será menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversores o a las inversiones de inversores de cualquier tercer Estado, el que sea más favorable al inversor.

2. Ambas Partes Contratantes concederán a los inversores de la otra Parte Contratante, en lo que respecta a la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute, la disposición, la venta o, en su caso, la liquidación de tales inversiones realizadas en su territorio, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado, el que sea más favorable al inversor.

3. El tratamiento concedido en virtud de los apartados 1 y 2 del presente Artículo no se interpretará en el sentido de obligar a cualquiera de las Partes Contratantes a hacer extensivo a los inversores de la otra Parte Contratante y a sus inversiones el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de su asociación o participación, actual o futura, en una zona de libre comercio, unión aduanera o económica o en cualquier otra forma de organización económica regional.

4. El tratamiento concedido en virtud de los apartados 1 y 2 del presente Artículo no se refiere a las ventajas que una de las Partes Contratantes conceda a las inversiones o inversores de terceros Estados como consecuencia de un Acuerdo para evitar la Doble Tributación u otros Acuerdos de carácter tributario.

5. Las medidas que se adopten por razones de orden público o seguridad y salud pública no se considerarán tratamiento "menos favorables" en el sentido del presente Artículo.

ARTICULO 5 NACIONALIZACION Y EXPROPIACION

1. Las inversiones de inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos similares (en adelante "expropiación") excepto por razones de utilidad pública, con arreglo al debido procedimiento legal, de manera no discriminatoria y acompañada del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.

2. La indemnización será equivalente al valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de que se adopte la medida de expropiación, se notifique oficialmente, o antes de que la inminencia de la misma sea de conocimiento público, lo que suceda primero (en adelante "fecha de valoración").

3. El valor de mercado se calculará en una moneda libremente convertible, al tipo de cambio vigente en el mercado para esa moneda en la fecha de valoración. La indemnización incluirá intereses a un tipo comercial fijado con arreglo a criterios de mercado para dicha moneda desde la fecha de expropiación hasta la fecha de pago. La indemnización se abonará sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible.

4. El inversor afectado tendrá derecho, de conformidad con la legislación de la Parte Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión de su caso, por parte de la autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente de dicha Parte Contratante, para determinar si la expropiación y la valoración de su inversión se han adoptado de acuerdo a los principios establecidos en este Artículo.

5. Si una Parte Contratante expropiara los activos de una empresa que esté constituida en su territorio de acuerdo con su legislación vigente y en la que existe participación de inversores de la otra Parte Contratante, la primera Parte Contratante deberá asegurar que las disposiciones del presente Artículo se apliquen de manera que se garantice a dichos inversores una indemnización pronta, adecuada y efectiva.

**ARTICULO 6
COMPENSACION POR PERDIDAS**

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento similar, se les concederá a título de restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, un tratamiento no menos favorable que aquel que la última Parte Contratante conceda a sus propios inversores o a los inversores de cualquier tercer Estado, el que sea más favorable al inversor afectado. Los pagos resultantes deberán ser libremente transferibles.

**ARTICULO 7
TRANSFERENCIAS**

1. Cada Parte Contratante garantizará a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia de todos los pagos relacionados con sus inversiones, y en particular, pero no exclusivamente, los siguientes:

- a) el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento, ampliación y desarrollo de la inversión;
- b) las rentas de inversión, tal y como han sido definidas en el Artículo 1;
- c) los fondos necesarios para el reembolso de préstamos vinculados a una inversión;
- d) las indemnizaciones y compensaciones previstas en los Artículos 5 y 6;
- e) el producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión;
- f) los sueldos y demás remuneraciones percibidas por el personal contratado en el exterior en relación con una inversión;
- g) los pagos resultantes de la solución de controversias.

2. Las transferencias a las que se refiere el presente Acuerdo se realizarán sin demora, en moneda libremente convertible al tipo de cambio de mercado vigente el día de la transferencia.

3. Sin perjuicio de las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este Artículo, cada Parte Contratante podrá demorar o impedir una transferencia mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de medidas:

- a) destinadas a proteger los derechos de acreedores;
- b) en relación con infracciones penales y resoluciones o sentencias en procedimientos administrativos y judiciales;

a condición de que dichas medidas y su aplicación no se utilicen como medio para eludir los compromisos u obligaciones de la Parte Contratante con arreglo al presente Acuerdo.

ARTICULO 8 OTRAS DISPOSICIONES

1. Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de las obligaciones emanadas del derecho internacional al margen del presente Acuerdo, actuales o futuras, entre las Partes Contratantes, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Acuerdo, en cuanto sea más favorable.
2. Las condiciones más favorables que las del presente Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte Contratante no se verán afectadas por el presente Acuerdo.
3. Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará a lo previsto en los Tratados Internacionales que regulen los derechos de propiedad intelectual / industrial.

ARTICULO 9 PRINCIPIO DE SUBROGACION

Si una Parte Contratante o la agencia por ella designada realizara un pago en virtud de un contrato de seguro o garantía otorgado contra riesgos no comerciales en relación con una inversión de cualquiera de sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última Parte Contratante reconocerá la subrogación de cualquier derecho o título de dicho inversor en favor de la primera Parte Contratante o de su agencia designada a ejercer, en virtud de la subrogación, cualquier derecho o título en la misma medida que su anterior titular. Esta subrogación hará posible que la primera Parte Contratante o la agencia por ella designada sean beneficiarias directas de todo tipo de pagos por indemnización o compensación a los que pudiese ser acreedor el inversor inicial.

ARTICULO 10 SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será resuelta, hasta donde sea posible, por vía diplomática.
2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje.

3. El tribunal de arbitraje se constituirá del siguiente modo: cada Parte Contratante designará un árbitro y estos dos árbitros elegirán a un ciudadano de un tercer Estado como Presidente. Los árbitros serán designados en el plazo de dos meses y el Presidente en un plazo de cuatro meses desde la fecha en que cualquiera de las dos Partes Contratantes hubiera comunicado a la otra Parte Contratante su intención de someter el conflicto a un tribunal de arbitraje.

4. Si dentro de los plazos previstos en el apartado 3 de este Artículo no se hubieran realizado los nombramientos necesarios, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro acuerdo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a realizar las designaciones necesarias. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia no pudiera desempeñar dicha función o fuera nacional de una de las Partes Contratantes se invitará al Vicepresidente para que efectúe las designaciones pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera desempeñar dicha función o fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes las designaciones serán efectuadas por el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga en antigüedad y que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.

5. El tribunal de arbitraje emitirá su dictamen sobre la base de las normas contenidas en el presente Acuerdo o en otros Acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes y sobre los principios generalmente admitidos de Derecho Internacional.

6. A menos que las Partes Contratantes lo decidan de otro modo, el tribunal establecerá su propio procedimiento.

7. El tribunal adoptará su decisión por mayoría de votos y será definitiva y vinculante para ambas Partes Contratantes.

8. Cada Parte Contratante correrá con los gastos del árbitro por ella designado y los relacionados con su representación en los procedimientos arbitrales. Los demás gastos, incluidos los del Presidente, serán sufragados por partes iguales por ambas Partes Contratantes.

ARTICULO 11 **CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE E INVERSORES DE** **LA OTRA PARTE CONTRATANTE**

1. Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas por el presente Acuerdo será notificada por escrito, incluyendo información detallada por el inversor de la otra Parte Contratante receptora de la inversión. En la medida de lo posible las partes en controversia tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.

2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el apartado 1, la controversia podrá someterse, a elección del inversor:

- a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión ; o
- a un tribunal de arbitraje "ad hoc" establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional; o
- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el "Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo se haya adherido a aquél. En caso de que una de las Partes Contratantes no fuera Estado Contratante del citado Convenio, la controversia se podrá resolver conforme al Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos por la Secretaría del CIADI.

3. El arbitraje se basará en:

- las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes;
- las reglas y los principios generalmente admitidos de Derecho Internacional;
- el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de Ley.

4. La Parte Contratante que sea parte en la controversia no podrá invocar en su defensa el hecho de que el inversor, en virtud de un contrato de seguro o garantía, haya recibido o vaya a recibir una indemnización u otra compensación por el total o parte de las pérdidas sufridas.

5. Las decisiones arbitrales serán definitivas y vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de acuerdo con su legislación nacional.

**ARTICULO 12
AMBITO DE APLICACION**

1. El presente Acuerdo se aplicará a las inversiones efectuadas, antes o después de la entrada en vigor del mismo, por los inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante conforme a las disposiciones legales de esta última. Sin embargo, el presente Acuerdo no será aplicado a ninguna controversia surgida con anterioridad a su entrada en vigor.

2. El tratamiento otorgado por el presente Acuerdo no se aplicará a materias tributarias.

**ARTICULO 13
ENTRADA EN VIGOR, PRORROGA, DENUNCIA**

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado recíprocamente el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales. Permanecerá en vigor por un período inicial de diez años y se prorrogará indefinidamente, a menos que una de las Partes Contratantes notifique por vía diplomática a la otra Parte Contratante su decisión de denunciar este Acuerdo con una antelación de seis meses.
2. Con respecto a las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de denuncia del presente Acuerdo, las disposiciones contenidas en los restantes artículos de este Acuerdo seguirán estando en vigor por un período adicional de diez años a partir de la fecha de denuncia.

**ARTICULO 14
DISPOSICION ADICIONAL**

El presente Acuerdo abroga y sustituye, a partir de su entrada en vigor, el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en Madrid el 24 de abril de 1990.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados por sus Gobiernos respectivos, firman el presente Acuerdo.

Hecho en Madrid, el 29 de octubre 2001 en dos originales en lengua española, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL REINO DE ESPAÑA

POR LA REPUBLICA DE BOLIVIA

JUAN COSTA CLIMENT
Secretario de Estado
de Comercio y Turismo

GUSTAVO FERNANDEZ SAAVEDRA
Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto

[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC OF BOLIVIA

The Kingdom of Spain and the Republic of Bolivia, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

Desiring to intensify their economic cooperation for the mutual benefit of both countries,

Intending to create favourable conditions for investments made by investors of each Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

and

Recognizing that the promotion and protection of investments under this Agreement will stimulate initiatives in this field,

Have agreed as follows:

Article I. Definitions

For the purposes of this Agreement,

1. The term "investor" means any national or any company of either Contracting Party making investments in the territory of the other Contracting Party:

(a) The term "national" means any physical person having the nationality of one of the Contracting Parties in accordance with its legislation;

(b) The term "company" means any legal person or any other entity constituted or duly organized in accordance with the laws of one of the Contracting Parties which has its registered office in the territory of that Party, such as for example limited liability companies, partnerships and associations.

2. The term "investments" means any kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the latter's legislation, including in particular, but not exclusively, the following:

(a) Movable and immovable property and other property rights such as mortgages, liens, usufructs and similar rights;

(b) Shares, bonds, debentures and any other form of participation in companies;

(c) Claims to money or any other contractual claim which has economic value and is connected with an investment;

(d) Intellectual property rights: industrial property rights such as distinguishing marks, patents, and industrial designs or drawings; copyrights and other related rights; integrated circuits and means of plant variation;

(e) Rights to undertake economic and commercial activities conferred by law or by contract, including concessions to explore and prospect for or to cultivate, extract or exploit natural resources.

Investments made in the territory of one Contracting Party by a company of that same Contracting Party but owned or effectively controlled by investors of the other Contracting Party shall likewise be regarded as investments of investors of the latter Contracting Party if they have been made in accordance with the legislation of the first Contracting Party.

No change in the form in which assets are invested or reinvested shall affect their character as investments, provided that such change is made in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. The term "investment returns" means the amounts yielded by an investment, in particular, but not exclusively, profits, dividends, interest, capital gains, royalties and fees, as well as any income from operating surpluses.

4. The term "territory" means:

(a) With respect to the Kingdom of Spain: the land territory, the internal waters and the territorial sea, as well as the exclusive economic zone and the continental shelf extending beyond the limit of the territorial sea, over which the Kingdom of Spain has or may have jurisdiction and/or sovereign rights pursuant to international law;

(b) With respect to the Republic of Bolivia: the territory under its sovereignty and jurisdiction pursuant to its legislation and international law.

Article 2. Promotion and admission of investments

1. Each Contracting Party shall promote in its territory, to the extent possible, investments of investors of the other Contracting Party and shall admit such investments in accordance with its legislation.

2. When a Contracting Party has admitted an investment in its territory, it shall issue, in accordance with its legislation, the necessary permits relating to the investment and to the implementation of licensing contracts and contracts of technical, commercial or administrative assistance. Each Contracting Party shall endeavour, whenever necessary, to issue the necessary authorizations relating to the activities of consultants and other skilled personnel, regardless of their nationality.

Article 3. Protection

1. Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall receive fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security. In no case shall either Contracting Party accord to such investments treatment less favourable than the treatment required by international law.

2. Neither Contracting Party shall in any way obstruct by arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, disposal, sale or, when necessary, liquidation of such investments. Each Contracting Party shall fulfil any written contractual

obligation in relation to investments of investors of the other Contracting Party which is in conformity with the domestic legislation of the first Contracting Party.

Article 4. National treatment and most-favoured-nation treatment

1. Each Contracting Party shall accord in its territory to investments of investors of the other Contracting Party treatment no less favourable than the treatment accorded to investments of its own investors or to investments of investors of any third State, whichever is more favourable to the investor.

2. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party, with respect to the management, maintenance, use, enjoyment, disposal, sale or, when necessary, liquidation of such investments made in its territory treatment no less favourable than the treatment accorded to its own investors or to investors of a third State, whichever is more favourable to the investor.

3. The treatment accorded pursuant to paragraphs 1 and 2 of this article shall not be construed as obliging either Contracting Party to extend to investors of the other Contracting Party or to their investments the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from its present or future association with or participation in any free-trade zone or customs or economic union or in any other form of regional economic organization.

4. The treatment accorded pursuant to paragraphs 1 and 2 of this article does not relate to the advantages which one Contracting Party may accord to investments or investors of third States under an agreement on the avoidance of double taxation or other tax agreements.

5. Measures adopted for reasons of public order or safety or public health shall not be regarded as "less favourable" within the meaning of this article.

Article 5. Nationalization and expropriation

1. Investments of investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be subject to nationalization, expropriation or any other measure having similar effects (hereinafter referred to as "expropriation") except for reasons of public interest and in accordance with due process of law, in a non-discriminatory manner, and with payment of prompt, adequate and effective compensation.

2. Such compensation shall be equivalent to the market value of the expropriated investment immediately before the adoption or official notification of the expropriation measure or before its imminence becomes publicly known, whichever is the earlier (hereinafter referred to as "the valuation date").

3. The market value shall be calculated in a freely convertible currency at the market exchange-rate for that currency on the valuation date. The compensation shall include interest at a commercial rate established in accordance with market criteria for that currency from the date of expropriation until the date of payment. The compensation shall be paid without delay and shall be effectively realizable and freely transferable.

4. The investor in question shall be entitled, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to prompt review of his case by the judicial authority or other

competent and independent authority of that Contracting Party in order to determine whether the expropriation and valuation of his investment have been effected in accordance with the principles established in this article.

5. If a Contracting Party expropriates the assets of a company which is constituted in its territory in accordance with the legislation in force there and in which investors of the other Contracting Party own shares, the first Contracting Party must ensure that the provisions of this article are applied in such a way as to guarantee to such investors prompt, adequate and effective compensation.

Article 6. Compensation for losses

Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, state of national emergency, insurrection, disturbance, or any other similar event shall be accorded, by way of restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment no less favourable than the treatment which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State, whichever is the more favourable to the investor concerned. The resulting payments shall be freely transferable.

Article 7. Transfers

1. Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party the free transfer of all payments relating to their investments, in particular, but not exclusively, the following:

- (a) The initial capital and additional amounts needed for the maintenance, increase or development of an investment;
- (b) Investment returns, as defined in article 1;
- (c) Funds needed for the repayment of loans connected with an investment;
- (d) Indemnification and compensation under articles 5 and 6;
- (e) Proceeds from the total or partial sale or liquidation of an investment;
- (f) Earnings and other remuneration of personnel recruited from abroad in connection with an investment;
- (g) Payments arising out of the settlement of disputes.

2. Transfers under this Agreement shall be made without delay in a freely convertible currency at the market exchange-rate prevailing on the day of the transfer.

3. Without prejudice to the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, each Contracting Party may delay or block a transfer by the application in good faith of fair and non-discriminatory measures:

- (a) Designed to protect the rights of creditors,
- (b) Relating to criminal offences or to decisions or sentences in administrative or judicial proceedings,

provided that such measures and their application are not used as a means of evading the Contracting Party's commitments and obligations under this Agreement.

Article 8. Other provisions

1. If, either now or in the future, the legislation of either Contracting Party or the mutual obligations of the Contracting Parties arising from international law apart from this Agreement result in a general or specific rule under which investments of investors of the other Contracting Party must be accorded more favourable treatment than the treatment provided for in this Agreement, such a rule shall prevail over this Agreement insofar as it is more favourable.
2. Terms agreed by one Contracting Party with investors of the other Contracting Party which are more favourable than the terms of this Agreement shall not be affected by this Agreement.
3. No provision of this Agreement shall affect the provisions of the international treaties regulating intellectual/industrial property rights.

Article 9. Principle of subrogation

If one Contracting Party or its designated agency makes a payment under an insurance contract or a guarantee against non-commercial risks in respect of an investment of one of its investors in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize the subrogation of any right or entitlement possessed by the investor to the first Contracting Party or its designated agency, which may then exercise, by virtue of the subrogation, any right or entitlement to the same extent as the preceding owner. This subrogation means that the first Contracting Party or its designated agency may become the direct beneficiary of any payment in respect of indemnification or compensation to which the initial investor could be entitled.

Article 10. Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement shall be settled, to the extent possible, through the diplomatic channel.
2. If the dispute cannot be settled in this way within six months from the start of the negotiations, it shall be submitted, at the request of either Contracting Party, to an arbitral tribunal.
3. The arbitral tribunal shall be constituted in the following way: each Contracting Party shall appoint one arbitrator and these two arbitrators shall choose a national of a third State as Chairman. The arbitrators shall be appointed within two months and the Chairman within four months from the date on which either Contracting Party informs the other Contracting Party of its intention to submit the dispute to an arbitral tribunal.
4. If the necessary appointments have not been made within the time limits specified in paragraph 3 of this article, either Contracting Party, in the absence of any other agree-

ment, may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President of the International Court of Justice is unable to perform this function or is a national of one of the Contracting Parties, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President is unable to perform this function or is a national of one of the Contracting Parties, the appointments shall be made by the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party.

5. The arbitral tribunal shall make its decision on the basis of the rules contained in this Agreement or in other agreements in force between the Contracting Parties and in accordance with the generally accepted principles of international law.

6. Unless the Contracting Parties decide otherwise, the arbitral tribunal shall establish its own procedures.

7. The tribunal shall adopt its decision by a majority of votes, and its decision shall be final and binding on both Contracting Parties.

8. Each Contracting Party shall bear the costs of the arbitrator which it appoints and the costs of its representation in the arbitral proceedings. The other costs, including those of the Chairman, shall be borne equally by the two Contracting Parties.

Article 11. Disputes between one Contracting Party and investors of the other Contracting Party

1. Any investment dispute which may arise between one of the Contracting Parties and an investor of the other Contracting Party in relation to matters regulated by this Agreement shall be notified in writing, with detailed information, by the investor to the other Contracting Party which is the recipient of the investment. The parties to the dispute shall endeavour to settle their differences, to the extent possible, by amicable accord.

2. If the dispute cannot be settled in this way within six months from the date of the written notification mentioned in paragraph 1, it may be submitted at the investor's choice to:

- The competent courts of the Contracting Party in whose territory the investment was made; or

- An "ad hoc" arbitral tribunal established in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law; or

- The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) established under the Convention on Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, which was opened for signature in Washington on 18 March 1965, if both Contracting Parties have acceded to this Convention. If one of the Contracting Parties is not a party to the Convention, the dispute may be settled by the ICSID secretariat under the Supplementary Mechanism for the administration of conciliation, arbitration and fact-finding procedures.

3. The arbitration shall be based on:

-The provisions of this Agreement and of other agreements concluded between the Contracting Parties;

- The rules and the generally accepted principles of international law;
 - The national law of the Contracting Party in whose territory the investment was made, including the rules on conflict of law.
4. The Contracting Party which is a party to the dispute may not invoke in its defence the fact that the investor has received or will receive, under an insurance contract or a guarantee, indemnification or other compensation for all or part of the losses suffered.
5. The arbitral decisions shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party undertakes to execute the decisions in accordance with its national legislation.

Article 12. Scope of application

1. This Agreement shall apply to investments made before or after its entry into force by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the legislation of the latter Contracting Party. However, this Agreement shall not apply to any dispute which arose before its entry into force.
2. The treatment accorded by this Agreement shall not apply to taxation matters.

Article 13. Entry into force, extension and denunciation

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have notified each other of the completion of their respective constitutional formalities required for the entry into force of international agreements. It shall remain in force for an initial period of 10 years and shall be extended indefinitely unless one of the Contracting Parties informs the other Contracting Party through the diplomatic channel, with six months' prior notice, of its decision to denounce this Agreement.
2. With respect to investments made before the date of the denunciation of this Agreement, the provisions contained in the other articles of this Agreement shall remain in force for an additional period of 10 years from the date of denunciation.

Article 14. Additional provision

This Agreement shall revoke and replace, on its entry into force, the Agreement between the Kingdom of Spain and the Republic of Bolivia on reciprocal promotion and protection of investments, signed at Madrid on 24 April 1990.

In witness whereof, the respective undersigned plenipotentiaries, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Madrid on 29 October 2001 in duplicate in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:

JUAN COSTA CLIMENT
Secretary of State for Trade and Tourism

For the Republic of Bolivia:

GUSTAVO FERNÁNDEZ SAAVEDRA
Minister for Foreign Affairs and Religion

[TRANSLATION — TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Royaume d'Espagne et la République de Bolivie, ci après dénommés " les Parties contractantes ",

Désirant intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux pays,

Se proposant de créer des conditions favorables aux investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties contractantes dans le territoire de l'autre Partie contractante, et

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements en conformité avec le présent Accord stimulent l'initiative dans ce domaine,

Sont convenus comme suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme " investisseur " s'entend de tout national ou de toute société de l'une des Parties contractantes qui effectue des investissements dans le territoire de l'autre Partie contractante :

a) Le terme " national " s'entend de toute personne physique possédant la nationalité de cette Partie contractante conformément à sa législation;

b) Le terme " société " s'entend de toute personne morale ou autre entité juridique constituée ou dûment établie selon la législation de cette Partie contractante et ayant son siège social dans le territoire de la même Partie contractante, telle qu'une société anonyme, une société à responsabilité limitée, une société en nom collectif ou une société de portefeuille, notamment.

2. Le terme " investissement " s'entend de tous les types d'actifs investis par un investisseur de l'une des Parties contractantes dans le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec la législation de cette dernière, notamment mais non exclusivement les suivants :

a) La propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que d'autres droits réels tels qu'hypothèques, gages et nantissements, usufruits et droits analogues;

b) Les actions, titres, obligations et toutes autres formes de participation dans des sociétés;

c) Les droits à des prestations pécuniaires et à toutes autres prestations contractuelles, qui ont une valeur économique et sont liés à un investissement;

d) Les droits de propriété intellectuelle : droits de propriété industrielle tels que signes distinctifs, brevets, dessins et modèles industriels; droits d'auteur et droits connexes; circuits intégrés et obtentions végétales;

e) Le droit de mener une activité industrielle et commerciale, concédé aux termes de la loi ou d'un contrat, notamment les concessions pour la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

Les investissements effectués dans le territoire de l'une des Parties contractantes par une société de cette même Partie contractante mais qui appartiennent ou sont effectivement contrôlés par des investisseurs de l'autre Partie contractante sont également considérés comme effectués par ces derniers investisseurs, sous réserve qu'ils aient été effectués en conformité avec les règles juridiques de la première Partie contractante.

Aucune modification de la forme dans laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n'affecte leur caractère d'investissement, sous réserve que cette modification soit conforme aux lois de la Partie contractante qui accueille l'investissement.

3. L'expression " revenus d'investissement " s'entend des montants produits par un investissement et, notamment mais non exclusivement, des bénéfices, dividendes, intérêts, plus values, redevances, honoraires et de tout revenu provenant de bénéfices d'exploitation.

4. Le terme " territoire " s'entend :

a) En ce qui concerne l'Espagne : du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale, ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental qui s'étendent au delà de la limite de la mer territoriale, sur lesquelles le Royaume d'Espagne exerce ou peut exercer sa compétence et (ou) ses droits de souveraineté en conformité avec le droit international;

b) En ce qui concerne la République de Bolivie : le territoire qui ressortit à la souveraineté et à la compétence de la République de Bolivie en conformité avec ses lois et avec le droit international.

Article 2. Promotion et admission des investissements

1. Chaque Partie contractante encourage dans la mesure du possible les investissements effectués dans son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet lesdits investissements en conformité avec ses lois et règlements.

2. Quand une Partie contractante a admis un investissement dans son territoire, elle délivre, en conformité avec ses lois et règlements, les permis nécessaires en rapport avec cet investissement et avec l'exécution des contrats de licence et d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie contractante s'efforce d'accorder en tant que de besoin les autorisations demandées en rapport avec les activités des consultants ou du personnel spécialisé, sans distinction de nationalité.

Article 3. Protection

1. Les investissements effectués par des investisseurs d'une Partie contractante dans le territoire de l'autre Partie contractante sont l'objet d'un traitement juste et équitable et jouissent d'une protection et d'une sécurité intégrales. Nulle Partie contractante ne soumet en aucun cas lesdits investissements à un traitement moins favorable que ne l'exige le droit international.

2. Nulle Partie contractante n'entrave par aucune mesure arbitraire ou discriminatoire la gestion, l'entretien, l'exploitation, la jouissance, la cession ou, le cas échéant, la liquidation desdits investissements. Chaque Partie contractante doit s'acquitter de toute obligation contractuelle qui a été souscrite en rapport avec les investissements de l'autre Partie contractante et qui est conforme aux lois de la première Partie contractante.

Article 4. Traitement national et clause de la nation la plus favorisée

1. Chaque Partie contractante assure dans son territoire aux investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui n'est pas moins favorable que le traitement le plus favorable à l'investisseur qu'elle accorde aux investissements effectués soit par ses propres investisseurs soit par des investisseurs de tout État tiers.

2. Les deux Parties contractantes assurent aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'exploitation, la jouissance, la cession ou, le cas échéant, la liquidation de leurs investissements effectués dans le territoire de cette autre Partie, un traitement qui n'est pas moins favorable que le traitement le plus favorable à l'investisseur qu'elle accorde aux investissements effectués soit par ses propres investisseurs soit par des investisseurs de tout État tiers.

3. Le traitement accordé en application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne saurait être interprété comme obligeant l'une ou l'autre des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements les avantages de tout traitement, préférence ou privilège résultant de son appartenance ou de son association, présente ou future, à une zone de libre échange, à une union douanière ou économique, ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.

4. Le traitement accordé en application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'étend pas aux avantages que l'une des Parties contractantes octroie aux investissements ou aux investisseurs d'États tiers en application d'un accord visant à éviter la double imposition ou d'autres accords d'ordre fiscal.

5. Ne sont pas considérées comme constituant un " traitement moins favorable " au sens du présent article les mesures qui sont adoptées pour des raisons de sûreté et d'ordre public ou de santé publique.

Article 5. Nationalisation et expropriation

1. Les investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties contractantes dans le territoire de l'autre Partie contractante ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de nationalisation ou d'expropriation, ni de toute autre mesure ayant des effets analogues (ci après dénommée " expropriation "), sauf pour des motifs d'intérêt public, selon les procédures dûment établies par la loi, de manière non discriminatoire et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité adéquate et effective.

2. L'indemnité doit être équivalente à la valeur marchande qu'avait l'investissement exproprié immédiatement avant la date à laquelle la mesure d'expropriation a été adoptée, mais en tout cas avant qu'elle ait été annoncée publiquement ou avant que son imminence n'ait été publiquement connue (ci après dénommée " date d'évaluation ").

3. La valeur marchande est calculée dans une monnaie librement convertible, au taux de change en vigueur sur le marché pour cette monnaie à la date d'évaluation. L'indemnité comprend les intérêts, calculés à un taux commercial établi sur la base du marché pour la monnaie d'évaluation, courus à partir de la date de l'expropriation et jusqu'à la date du paiement. L'indemnité doit être payée sans demeure et doit être effectivement réalisable et librement transférable.

4. L'investisseur concerné a droit d'exiger, en conformité avec les lois de la Partie contractante qui procède à l'expropriation, que l'autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de ladite Partie examine promptement son cas afin de déterminer si les mesures d'expropriation et d'évaluation de son investissement ont été adoptées en conformité avec les principes établis au présent article.

5. Si une Partie contractante exproprie les actifs d'une entreprise constituée dans son territoire selon les lois en vigueur avec la participation d'investisseurs de l'autre Partie contractante, la première Partie contractante doit s'assurer que les dispositions du présent article s'appliquent de manière à garantir auxdits investisseurs une indemnisation prompte, adéquate et effective.

Article 6. Indemnisation de pertes

Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements dans le territoire de l'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre, d'un conflit armé, d'un état d'urgence nationale, d'une insurrection, de troubles ou de tout autre événement similaire, se voient accorder, à titre de restitution, d'indemnisation, de compensation ou d'autre règlement, le traitement le plus favorable que cette autre Partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers. Les paiements correspondant doivent être librement transférables.

Article 7. Transferts

1. Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à leurs investissements. Lesdits paiements comprennent en particulier, mais non exclusivement :

- a) L'apport de capital initial et tout apport additionnel nécessaire à l'entretien, à l'expansion et à la mise en valeur de l'investissement;
- b) Les revenus des investissements, tel que définis à l'article premier;
- c) Les fonds nécessaires à l'amortissement des prêts relatifs à un investissement;
- d) Les indemnités et compensations prévues aux articles 5 et 6;
- e) Le produit de la cession ou de la liquidation de tout ou partie d'un investissement;
- f) Les traitements et autres rémunérations reçus par le personnel engagé à l'extérieur en rapport avec un investissement;
- g) Les paiements résultant du règlement de différends.

2. Les transferts dont il est question au présent article sont effectués sans demeure dans une devise librement convertible et au taux de change en vigueur sur le marché à la date du transfert.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque Partie contractante peut retarder ou interdire la réalisation des transferts en appliquant, de manière équitable, sans discrimination et de bonne foi, des mesures :

a) Visant à protéger les droits de créanciers;

b) Adoptées en rapport avec des infractions pénales ou en exécution de décisions rendues dans le cadre de procédures administratives et judiciaires;

sous réserve que lesdites mesures et leur application ne soient pas utilisées dans le dessein de se soustraire aux engagements et obligations de la Partie contractante qui résultent du présent Accord.

Article 8. Dispositions diverses

1. Si les règles juridiques de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou les obligations de droit international, qui existent actuellement ou qui pourront être établies par la suite entre les Parties contractantes outre le présent Accord, comportent un règlement, général ou spécifique, octroyant aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, ledit règlement l'emporte sur le présent Accord dans la mesure où il est plus favorable.

2. Le présent Accord ne déroge nullement aux conditions, plus favorables que celles prévues dans le présent Accord, qui seraient accordées par une des Parties contractantes aux investisseurs de l'autre Partie contractante.

3. Le présent Accord ne déroge nullement aux dispositions des traités internationaux qui régissent les droits de propriété intellectuelle et industrielle.

Article 9. Principe de subrogation

Si l'une des Parties contractantes ou une entité par elle désignée effectue un paiement en vertu d'une police d'assurance ou d'une garantie couvrant les risques non commerciaux en rapport avec un investissement effectué par l'un de ses investisseurs dans le territoire de l'autre Partie contractante, cette autre Partie contractante reconnaît la subrogation de la première Partie contractante ou de l'entité par elle désignée dans tous les droits ou titres du dit investisseur, et celle-ci peut dès lors exercer lesdits droits ou titres de la même manière que son prédécesseur en titre. Ladite subrogation permet à la première Partie contractante, ou à l'entité par elle désignée, de bénéficier directement des paiements auxquels l'investisseur pourrait avoir droit à titre d'indemnité ou de compensation.

Article 10. Règlement des différends entre les Parties contractantes

1. Tout différend s'élevant entre les Parties contractantes en rapport avec l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé autant que possible par la voie diplomatique.

2. S'il ne peut être ainsi réglé dans les six mois qui suivent l'ouverture des négociations, le différend est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes.

3. Le tribunal arbitral est constitué de la façon suivante : chaque Partie contractante désigne un arbitre et ces deux arbitres élisent un national d'un pays tiers en tant que Président. Les arbitres sont désignés dans les trois mois et le Président dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'une des deux Parties contractantes a informé l'autre de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.

4. Si les nominations nécessaires ne sont pas faites dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, l'une ou l'autre Partie contractante peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est empêché ou s'il est un national de l'une des Parties contractantes, le Vice Président est invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le Vice Président est empêché ou s'il est un national de l'une ou l'autre des Parties contractantes, les nominations sont effectuées par le doyen des membres de la Cour qui n'est national d'aucune des Parties contractantes.

5. Le tribunal arbitral tranche le différend en se fondant sur la loi et les dispositions du présent Accord ou de tout autre accord en vigueur entre les Parties contractantes, ainsi que sur les principes universellement reconnus du droit international.

6. À moins que les Parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal arbitral arrête son propre règlement.

7. Le tribunal arbitral se prononce à la majorité simple des voix et sa décision est sans appel et exécutoire pour les deux Parties contractantes.

8. Chaque Partie contractante prend en charge les frais de l'arbitre qu'elle a nommé et les coûts de sa représentation à l'arbitrage. Les frais du président et les autres coûts sont pris en charge, à parts égales, par les deux Parties contractantes.

Article 11. Différends entre une Partie contractante et les investisseurs de l'autre Partie contractante

1. Tout différend s'élevant entre une des Parties contractantes et un investisseur et l'autre Partie contractante concernant une question régie par le présent Accord doit être notifié par écrit, accompagné de renseignements détaillés, par l'investisseur de l'autre Partie contractante qui accueille l'investissement. Les parties au différend s'efforcent autant que possible de régler celui ci à l'amiable.

2. Si le différend ne peut être ainsi réglé dans les six mois qui suivent la date de la notification écrite dont il est question au paragraphe 1, l'investisseur peut soumettre le différend, à sa discrétion :

- À la juridiction compétente de la Partie contractante dans le territoire de laquelle l'investissement a été effectué;

- À un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément aux termes du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international; ou

- Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, si les deux Parties contractantes sont parties à ladite Convention. Si l'une des Parties contractantes n'est pas partie à ladite Convention, le règlement peut être réglé en conformité avec les règles régissant le Mécanisme supplémentaire pour l'administration par le Secrétariat du CIRDI des procédures de conciliation, d'arbitrage et d'établissement des faits.

3. L'arbitrage se fonde sur :

- Les dispositions du présent Accord ou de tout autre accord conclu entre les Parties contractantes;
- Les règles et principes généralement reconnus du droit international;
- Le droit national de la Partie contractante dans le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, y compris les règles relatives aux conflits de droit.

4. La Partie contractante qui est partie au différend ne peut invoquer comme exception le fait que l'investisseur a reçu ou va recevoir, en application police d'assurance ou d'une garantie, une indemnité ou autre compensation pour tout ou pertes subies.

5. La sentence arbitrale est sans appel et exécutoire pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter la sentence arbitrale en conformité avec sa législation nationale.

Article 12. Champ d'application

1. Le présent Accord s'applique aux investissements effectués, avant ou après son entrée en vigueur, par des investisseurs de l'une des Parties contractantes dans le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois de cette dernière. Il ne s'applique cependant pas aux différends qui se sont élevés avant son entrée en vigueur.

2. Nul traitement accordé en conformité avec le présent Accord ne s'applique en matière fiscale.

Article 13. Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur pendant une période initiale de 10 ans et sera renouvelé par tacite reconduction pour une période indéterminée, à moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes n'adresse à l'autre, par la voie diplomatique, une notification écrite de son intention de le dénoncer, avec un préavis de six mois.

2. S'agissant des investissements effectués avant la date de la dénonciation du présent Accord, les dispositions de tous les autres articles du présent Accord continuent de déployer leurs effets pendant une période supplémentaire de 10 ans à compter de la date de la dénonciation.

Article 14. Disposition supplémentaire

Le présent Accord annule et remplace, dès son entrée en vigueur, l'Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Bolivie relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Madrid le 24 avril 1990.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, à ce dûment habilités par leur Gouvernement, signent le présent Accord.

Fait à Madrid le 29 octobre 2001 en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes étant également authentiques.

Pour le Royaume d'Espagne :
La Secrétaire d'État au commerce et au tourisme,
JUAN COSTA CLIMENT

Pour la République de Bolivie :
Le Ministre des relations extérieures et du culte,
GUSTAVO FERNANDEZ SAAVEDRA